

Poder Ejecutivo

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-094-2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 245 de la Constitución de la República, el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado y para ejercer sus atribuciones tiene la facultad de emitir Acuerdos, Decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a la ley.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 245, numeral 20 de la Constitución de la República, el Presidente de la República tiene la atribución de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés nacional, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional; atribución que también se encuentra contenida en el Artículo 22, numeral 5 de la Ley General de la Administración Pública; atribuyendo doctrinariamente la extraordinariedad como todo acontecimiento que sale de lo común y que no es usual.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 2, numeral 8 y Artículo 2, numeral 17 del Código Tributario definen los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. Ambos son hechos positivos no imputables al obligado tributario o sea que revisten ausencia de culpa, los cuales no se encuentran obligados a probarlos ya que son eventos cuya causa de un incumplimiento se deben a un hecho o evento de origen extraordinario (que un evento no es común o usual), imprevisto (que no hayan motivos atendibles para presumir que un evento va a suceder),

irresistible (imposibilidad de incumplimiento) y, en algunos casos, inevitable (que no hay forma de impedir que el evento suceda).

CONSIDERANDO: Que en días posteriores al 26 de noviembre de 2017, fecha en que acontecieron las elecciones generales convocadas por el Tribunal Supremo Electoral, se suscitaron manifestaciones en las calles, tomas de carretera, tomas de espacios públicos, daños a la propiedad pública y privada, incendios, saqueos y otros actos de vandalismo ejecutados en forma tumultuaria que han derivado en consecuencias negativas para el ejercicio de la actividad económica de empresas e individuos. Por esa misma situación, el Poder Ejecutivo tuvo que Decretar la suspensión de la garantía constitucional de circulación a nivel nacional, por los primeros días del mes de diciembre y que aún se mantiene vigente en algunos sectores del país, en determinados horarios y espacios territoriales de la Nación, con el objetivo que la Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, lograrán mantener el orden público, la protección de los bienes públicos y privados y la seguridad y vida de las personas, nacionales y extranjeras.

CONSIDERANDO: Que la gran mayoría de los actos vandálicos afectaron y transgredieron directamente a empresas industriales y comerciales a nivel nacional, asimismo instituciones del sistema bancario y financiero del país, por lo que éstas se vieron en la necesidad de garantizar la seguridad de sus bienes y sus colaboradores, limitando las oficinas, centros de trabajo y sucursales que normalmente operan, atendiendo en horarios limitados dentro de los horarios que contempla los Decretos Ejecutivos PCM-084-2017 (derogado), PCM-085-2017, PCM-088-2017.

CONSIDERANDO: Que como consecuencia de la inseguridad que varias empresas y personas naturales sufrieron por los actos vandálicos que acontecieron a nivel nacional, así como por las limitaciones de agencias y horarios que establecieron las instituciones del sistema bancario y financiero, muchas obligaciones económicas y financieras, incluyendo las obligaciones tributarias que son parte de las mismas, ya éstas de carácter formal o material, no fueron posibles cumplirlas en tiempo y forma.

POR TANTO:

En uso de las facultades contenidas en los Artículos 245 numeral 11 y 20 de la Constitución de la República; Artículos 5, 11, 22 numeral 9, 116 y 117 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas; Artículos 2 numerales 2 y 17 del Código Tributario y Decreto Ejecutivo número PCM-092-2017.

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 1, del Decreto Ejecutivo número PCM-092-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, el 12 de diciembre del 2017 edición número 34,515, el cual debe leerse así:

“Como medida extraordinaria económica de interés nacional se prorroga el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales correspondientes al período mensual de noviembre del año del año dos mil diecisiete (2017) y que debieron ejecutarse a más tardar dentro de los primeros diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), para que se cumplan a más tardar dentro de los primeros diez días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), junto con las obligaciones tributarias formales y materiales que corresponden al mes de diciembre del año del año dos mil diecisiete (2017).

El cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales comprendidas dentro del plazo de la prórroga, se perfeccionarán sin sanciones por faltas formales o materiales, ya sean estas principales o accesorias.

Dicha prórroga y sus beneficios igualmente aplicarán al cumplimiento de las obligaciones tributarias para los obligados tributarios sujetos a un período especial cuyo vencimiento fuese el mes de diciembre del año del año dos mil diecisiete (2017).

Lo anterior es aplicable a los obligados tributarios que se han visto perjudicados por las manifestaciones, incendios, saqueos y otros actos de vandalismo, ocurridos posteriormente a las elecciones generales celebradas en el mes de noviembre del año del año dos mil diecisiete (2017)”.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto Ejecutivo debe entrar en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del dos mil diecisiete (2017).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO
SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE
GOBIERNO

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ
SECRETARIO DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN
Y DESCENTRALIZACIÓN

MARIA DOLORES AGÜERO LARA
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

MIGUEL ANTONIO ZÚNIGA RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, POR LEY

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DESARROLLO ECONÓMICO

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, POR
LEY

JULIÁN PACHECO TINOCO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD

FREDY DÍAZ ZELAYA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA

DELIA RIVAS LOBO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD

RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

JACOBO PAZ BODDEN

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

JOSÉ ANTONIO GALDAMES F.

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS